

Campaña de trapitos al sol

Colocada la corrupción del gobierno como el principal hándicap para mantener al PRI en el poder, el ex secretario de Hacienda, José Antonio Meade, tendrá que lidiar con infinidad de trapitos al sol exhibidos al fragor de la campaña por la oposición. Uno de ellos habla de transferencias millonarias al Estado de México a título de subsidios, cuyo monto desapareció misteriosamente en la presunción de que parte de éste se transfirió a la campaña priista por la gubernatura.

Desdeñada por el Instituto Nacional Electoral la denuncia realizada por un organismo ciudadano, ésta se encuentra ahora en la mesa del aún auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal. Las telas hablan de la inaudita conversión de un reclamo de 50 mil millones de pesos viejos y otro de 75 mil, en 3 mil 566 millones de pesos actuales, es decir, ya sin los tres ceros que quitó el gobierno salinista.

El hilo se remonta a 1991, cuando el gobierno de la entidad le otorgó a la empresa Promotora y Administradora de Carreteras una concesión para construir, conservar, explotar y mejorar el tramo carretero de jurisdicción federal Chamapa-Lechería por un lapso de 18 años con cuatro meses. En la ruta el concesionario se obligó a entregar 50 mil millones de pesos viejos (50 millones actuales) para cubrir indemnizaciones por terrenos que resultaron afectados.

En el escenario la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se obligaba a su vez a otorgarle una concesión al gobierno del Estado de México, vencida la primera, por 20 años para recuperar su aportación con cargo a las cuotas de peaje. Recuperados los recursos, el remanente se emplearía en un programa de construcción, reconstrucción, conservación y modernización de autopistas en la entidad. El caso es que seis años después se decidió expropiar algunas concesiones carreteras, entre ellas la Chamapa-Lechería.

El Decreto prohibía incluir en la indemnización correspondiente el capital de riesgo aportado directa o indirectamente a los proyectos, lo que excluía la posibilidad de recuperar los 50 millones. En la operación se designó al Banco Nacional de Obras y Servicios como fiduciario para administrar las carreteras rescatadas. El caso es que en agosto de 2009 el gobierno del Estado de México le reclamó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes los 50 millones, agregando otros 75 que, según había aportado para la realización de obras sociales, cuestión no contemplada en los convenios.

Lo inaudito del caso es que los 125 millones se convertirían, aduciendo que debía aplicarse una inaudita tasa de 10% real anual, es decir descontada la inflación en tres mil 671 millones de pesos. Lo grave del caso es que el gobierno autorizó el pago. La primera transferencia de 500 millones se realizó el 23 de diciembre de 2014 hacia el Centro SCT México, por concepto de indemnización.

Sin embargo, la Secretaría de Hacienda colocó el recurso en la partida 43801 "Subsidios a Entidades Federativas y Municipios". En 2015 llegaría otra remesa de mil millones. El resto, para llegar a 3 mil 100 millones, llegó en 2016. El hecho es que la entrada de los recursos no se registró como ingreso, por más que el receptor, Sistema de Autopistas, Aeropuertos y Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México, lo colocó en una cuenta de Bancomer que el 30 de noviembre de 2016 estaba en cero.

En su respuesta al INE, el gobierno estatal habló de que los recursos se utilizaron en retenciones de impuestos sobre la renta, de sueldo y salario y nómina, además de operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales. El problema es que ninguno de esos conceptos se engloba como destino de un subsidio. Misterios de la vida.

Se multiplican robos. A contrapelo de las estadísticas oficiales, de enero a octubre del año se incrementaron en 300% los robos a transporte de carga, cuyo énfasis se coloca en el Estado de México y Puebla. Estamos hablando de mil 129 asaltos a tráileres y camiones con mercancías, de los cuales 73%, es decir 822, se han recuperado las unidades, y el resto se ubica en los inventarios como pérdida total. En la desesperación se acaba de inaugurar un centro de monitores para seguir las rutas. Las mercancías más codiciadas son artículos eléctricos y electrónicos, abarrotes y ropa, por su facilidad de venderse en el mercado negro. La parte más peligrosa, en el caso de Puebla, es el llamado Triángulo Rojo, ubicado en los límites de la entidad con Tlaxcala y Veracruz. Si antes la delincuencia se conformaba solo con las mercancías, ahora se llevan los vehículos para desmantelarlos y vender las autopartes.

COLUMNA DE ENRIQUE CAMPOS SUAREZ. Noviembre 29 del 2017
--

Cambio en los reflectores presidenciales

En algún momento del mensaje de Enrique Peña Nieto cuando daba a conocer la renuncia de José Antonio Meade Kuribreña a la Secretaría de Hacienda confundió su cargo y se refirió a él como secretario de Relaciones Exteriores. Un lapsus sin trascendencia que el presidente Peña pensó que se convertiría en la nota del día siguiente y la verdad es que no. Pasó de noche como habrá de pasar en adelante mucho de lo que haga.

Peña Nieto no cederá tan fácilmente los reflectores, pero eventualmente tendrá que dar un paso hacia atrás para dejar que el candidato de su partido posicione muchas ideas que seguramente podrían sonar contrastantes con las políticas del gobierno actual, sin llegar claro a la confrontación.

Los cambios en el gabinete que vienen y hasta la designación del integrante que falta de la Junta de Gobierno del Banco de México son decisiones que ya están tomadas, sólo en espera de ser anunciadas y son armónicas con la candidatura priista a la Presidencia.

En términos de finanzas públicas lo que vimos el lunes, además del destape de José Antonio Meade como candidato presidencial del PRI, fue la garantía de continuidad de las finanzas públicas en proceso de corrección y la certeza de que no se permitirá su deterioro con fines electorales. José Antonio González Anaya garantiza un manejo pulcro de la hacienda pública, alejado de la tentación de descomponer la relación de ingresos y gastos con fines de influencia electoral.

Hay una razón muy sencilla más allá de la buena voluntad de los dos José Antonios y es que si en algún lugar le van a buscar sus contrincantes para poder atacar al candidato del PRI será en el manejo de la economía en estos tiempos electorales. No parece que pueda haber mucha divergencia del nuevo secretario de Hacienda con el Banco de México en materia de política monetaria.

Ciertamente que la estrategia de subir las tasas para combatir un traspaso inflacionario no es algo compatible con la búsqueda de un crecimiento más robusto, pero todo parece indicar que los pleitos que sí hubo entre funcionarios de Hacienda y el Banxico ya quedaron atrás. Lo deseable es que durante este último año de gobierno de Enrique Peña Nieto la administración pública se dedique a administrar la estabilidad. Pero hay factores externos que amenazan esa paz económica y financiera.

El epicentro de las preocupaciones durante los próximos meses es la Casa Blanca y sus políticas comercial y fiscal. Un rompimiento abrupto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte obligará a un control de daños inmediato. Y una reforma fiscal que pase por el Congreso estadounidense y cuya implementación pudiera ser inmediata, también puede forzar cambios para controlar una posible sangría de recursos extranjeros.

Paradójicamente, si Estados Unidos se anima a desestabilizar a México de esa manera, el más favorecido sería el candidato priista, ya que sería el único con la posibilidad de entender y explicar una estrategia. Aunque realmente lo mejor es no tener ese sobresalto durante el 2018.

Un año y un día es lo que le queda en el gobierno a Peña Nieto y tiene que irse acostumbrando a que su candidato y los otros aspirantes le van a arrebatar esa atención de la que gozaba, para bien y para mal, por parte de la opinión pública. Así funciona. ecampos@eleconomista.com.mx